LA LARGA MARCHA HACIA LA PAZ: EL SALVADOR

Juan A. Estrada Díaz, S.J.

TRAS más de once años de una guerra civil que ha costado cerca de 100.000 muertos, que ha dividido al país, ha desarticulado la estructura económica y ha generado la emigración de cientos de miles de salvadoreños, El Salvador comienza a ver la posibilidad de la paz. Nunca estuvo tan cerca como ahora, nunca hubo un consenso mayor entre los bandos contrarios sobre la necesidad de poner término a una guerra que nadie puede ganar, y tampoco nunca hubo circunstancias internacionales tan favorables. Sin embargo, la paz sigue estando en el aire, pendiente de un hilo y todavía es posible que vuelva a retroceder para alargar por tiempo indefinido una guerra cada vez más inútil y absurda. Más aún, la guerra se ha recrudecido en los últimos meses de forma paralela a la prolongación de las negociaciones.

Vamos a analizar las condiciones actuales de El Salvador para intentar comprender el contexto en el que se desarrollan las actuales negociaciones entre el Gobierno y el FMLN («Farabundo Martí para la Liberación Nacional»). Nos encontramos en un momento crucial y en las conversaciones de ambos bandos convergen intereses y fuerzas contrapuestas, que son las que, simultáneamente, nos permiten abrigar grandes esperanzas y, al mismo tiempo, hacen muy difícil la negociación. Esas circunstancias son las que determinan la vida nacional a nivel político, económico y militar.

Las últimas elecciones generales

En el contexto de una fuerte presión internacional en favor de una paz negociada, se celebraron las elecciones de marzo de este año. Había expectación por ver si había algún cambio respecto a las anteriores, caracterizadas por el fraude colectivo, una abstención masiva y la marginación de una parte de la población, siguiendo los dictados del FMLN. Los

resultados confirmaron sólo en parte estas expectativas: la participación electoral alcanzó al 43 por 100 del electorado, sin embargo, por primera vez no hubo condena de las elecciones por la guerrilla, que aunque no animó a la participación tampoco las rechazó.

LA elevada abstención fue favorecida intencionadamente por el Consejo de elecciones, que puso dificultades administrativas para que se obtuviera el obligado carnet electoral, autorizó a que el servicio público disminuyera el servicio el día de las elecciones (con lo que se perjudicaba a los sectores populares), trasladó a última hora mesas electorales sin información previa y, sobre todo, presentó un censo electoral plagado de omisiones que se acumulaban en los barrios en los que se vota a la izquierda. No hubo un fraude masivo en las votaciones pero sí significativas irregularidades en el recuento, en el que Convergencia Democrática, la coalición de izquierdas que correspondería en España a Izquierda Unida, pasó, sorprendentemente, de ser el tercer partido del país al cuarto lugar, después de que se parara el proceso de recuento de los votos, aduciendo problemas de computadores.

El resultado final se daba 12 días después de las elecciones. El partido gobernante ARENA perdía la mayoría del Congreso y alcanzaba 39 diputados, la Democracia Cristiana 26, y en tercer lugar el PCN con 9 escaños, partido derechista aliado de ARENA, relegando al cuarto lugar a Convergencia Democrática con 8 diputados. Sin embargo, Convergencia era el tercer partido más votado, ya que cuenta con un 20 por 100 de sufragios más que el PCN. Lo más significativo de las elecciones es la pérdida de mayoría absoluta del partido del Gobierno y el éxito de la izquierda, que hubiera sido previsiblemente mayor de haber habido una mayor participación electoral. El partido del Gobierno ha sido votado por menos del 20 por 100 del electorado, pero sigue siendo el más votado.

Convergencia Democrática es el partido más cercano a las posturas de la guerrilla. Su electorado está centrado en los núcleos urbanos y en la población masculina, estando casi ausente en los medios rurales y entre el electorado femenino. Es también en la zona rural donde el partido del Gobierno y el ejército pueden ejercer una mayor presión social y política en contra de los candidatos de la izquierda. De todos modos la presencia de Convergencia en el parlamento asegura una mayor pluralidad política. No cabe duda de que se ha iniciado una nueva etapa parlamentaria. El sector «duro» de ARENA supo captarlo e inició una campaña de anuncios en la prensa y televisión condenando a Convergencia como brazo político del FMLN. Estos «spots» publicitarios constituían una peligrosa amenaza para los líderes de Convergencia como invitación tácita a los escuadrones de la muerte para que actuaran, como ya ha ocurrido en el pasado reciente.

El caso de los jesuitas

EL asesinato de los jesuitas ha sido un tema constante de la vida pública nacional. Días antes de que el Gobierno Bush tuviera que decidir sobre la reanudación efectiva de la ayuda militar, apareció en la prensa norteamericana, por filtración confesada de la Secretaría de Estado, una carta del Alto Mando del Ejército al ministro de Justicia solicitando algunas investigaciones complementarias sobre el asesinato que alcanzaban a otros doce oficiales, entre ellos el ex jefe de la Dirección de Inteligencia y miembros de la Plana Mayor del comando de seguridad que operó en la Escuela Militar en el momento de la masacre.

La carta, fechada el 22 de febrero, fue aireada como un signo de la buena voluntad del ejército por clarificar los hechos y como una muestra ante la opinión pública norteamericana de la trasparencia del Gobierno. Una vez aprobado el envío de la ayuda militar, las aguas volvieron a su cauce y el mismo ministro del ejército declaró que los doce militares mencionados no estaban implicados, simplemente podrían ayudar a esclarecer los hechos.

Por su parte, el provincial de los jesuitas ha denunciado repetidamente la complicidad de la Secretaría de Estado estadounidense y de su embajada en El Salvador, reteniendo datos cruciales sobre la masacre, impidiendo el testimonio oral de los funcionarios norteamericanos, y poniendo toda serie de trabas para el acceso a la información que se posee en Estados Unidos. Los fiscales del Estado renunciaron en enero a sus cargos, quejándose de que el Gobierno obstruía sus investigaciones y de que estaban sufriendo amenazas e intromisiones en sus funciones. Pasaron a ser acusadores particulares, representando a las familias de las víctimas y a la Compañía de Jesús.

La reciente visita del senador Mockley, que generó tensiones con la embajada norteamericana, ha agudizado la significación política del caso. El senador Mockley reveló que existía un plan preconcebido de amnistiar a los acusados, si éstos guardaban silencio en el juicio y no revelaban la complicidad intelectual de otros oficiales del Alto Estado Mayor. Mockley pidió al presidente Cristiani que no se amnistiara a los acusados para así presionarlos a que digan la verdad. Cristiani siempre ha defendido la posible amnistía. El pacto está hecho: primero juicio, luego condenación de algunos de los acusados y finalmente la amnistía.

Por primera vez en la reciente historia salvadoreña se acusó al Estado y se le exigió una reparación subsidiaria por delitos cometidos por funcionarios estatales. Se ha pedido una indemnización para el hijo de la señora asesinada y el símbolo de «un colón» (unas catorce pesetas) por cada jesuita asesinado. Se busca con ello crear un precedente jurídico de la responsabilidad subsidiaria del Estado, al que podrían acogerse otras víctimas en el futuro. Nunca un oficial del ejército ha sido juzgado por

violación de los derechos humanos o actos criminales a pesar de las reiteradas acusaciones de los organismos internacionales en los últimos once años.

Los resultados del juicio son de todos conocidos. Condena de dos oficiales superiores, un coronel y un teniente, y absolución para todos los demás, a pesar de sus declaraciones anteriores sobre su coautoría en la matanza. Ha prevalecido la «obediencia debida» para los soldados y pronto los condenados serán amnistiados. Un buen testimonio de cómo están las cosas en El Salvador, donde la vida humana carece de valor. Los autores intelectuales del crimen siguen en el anonimato, aunque algunos nombres circulan en privado. Oficialmente nunca llegaremos a conocerlos, como ocurrió en el caso de monseñor Romero y tantos otros, decenas de miles...

El ejército como colectivo se refugia en el «no sabe, no recuerda, no oyó nada» cuando se pregunta a sus miembros sobre lo que ocurrió la noche de la masacre. Por otra parte, el FMLN ve el caso de los jesuitas como un «test» de la voluntad política del ejército y del Gobierno por hacer justicia, ya que se trata de un caso público, con resonancia internacional, que hubiera puesto coto a la impunidad total de la que ha gozado la fuerza armada. Para el propio FMLN se convierte en un antecedente significativo: en caso de llegarse a un acuerdo de paz, nadie podría asegurar que los líderes del FMLN no fueran asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas, si éstas siguen gozando de impunidad.

LOS asesinatos de campesinos y obreros, las desaparicientes y los asaltos a las sedes de organizaciones de izquierda han seguido sucediéndose durante todo este año y se han incrementado en los meses del verano. Según la Comisión de Derechos Humanos desde junio de 1990 a junio de 1991 han desaparecido 169 personas, 721 fueron capturadas ilegalmente por las fuerzas armadas, y 1.355 civiles han sido ejecutados o han muerto a consecuencia del fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla. Se achacan 53 asesinatos a los escuadrones de la muerte.

La citada Comisión denuncia a ambos bandos pero con abrumadora mayor responsabilidad del ejército, que sigue practicando la tortura en muchos casos. Se denuncian también los reclutamientos forzosos para el servicio militar, a veces con violencia física, que se centran en los campesinos y clases bajas de la población, y no conciernen a la clase media y alta. La comisión de la ONU ha iniciado hace un par de meses la verificación de los abusos de derechos humanos en El Salvador y ya ha sido amenazada de muerte por los escuadrones de la muerte.

El caso del Diario Latino

Juntamente con el asesinato de los jesuitas ha sido el caso del *Diario Latino* el que ha tenido una mayor relevancia en la opinión pública

y el que mejor ejemplariza las dificultades existentes para la instauración de una democracia real en El Salvador. Se trata del periódico más antiguo del país, que celebró el pasado año su centenario y procedió a una reestructuración, con una venta masiva de acciones entre los empleados, que pasaron a ser copropietarios y a estar representados en la política editorial.

EL resultado fue espectacular: se inició un estilo de periodismo más ágil, independiente y agresivo, publicando una serie de noticias que los otros periódicos no se atrevían a dar. Aparecían artículos con un enfoque crítico respecto al Gobierno y al ejército, siempre dentro de un estilo de periódico liberal y de centro izquierda en la línea de otros periódicos europeos o norteamericanos. Por ejemplo, fue el único periódico que se atrevió a publicar el texto completo del Congreso estadounidense en el que se detallaba el papel de los militares en el asesinato y posterior encubrimiento del asesinato de los jesuitas.

El resultado fue significativo: en pocos meses el periódico quintuplicó el número de suscriptores. La publicidad comenzó a aumentar, con una significativa ausencia de las instancias gubernamentales. La opinión pública valoraba su esfuerzo informativo, del que se hacían eco algunas cadenas de televisión. Pero comenzaron los problemas: los empleados recibieron amenazas de muerte anónimas y advirtieron vehículos sospechosos en los alrededores de la redacción. La esposa del editor del diario fue tiroteada por un desconocido, y un empleado y un reportero conocido por su audacia informativa fueron matados en un misterioso y no aclarado choque de automóviles.

Estas amenazas culminaron el pasado mes de febrero cuando unos desconocidos incendiaron el periódico, destruyendo todas sus instalaciones. La excusa de un accidente se eliminó al descubrirse bidones de gasolina que se habían empleado en el incendio. Los miembros del diario inmediatamente acusaron de esta acción a miembros de ultraderecha, pertenecientes al Gobierno y al ejército, mientras que el partido gobernante ARENA no tuvo dificultad en declarar por un diputado que el incendio se debía a un «autoataque» del propio periódico para hacerse publicidad. A esta opinión se sumaron portavoces norteamericanos, que sin embargo, no han podido presentar prueba alguna de sus imputaciones. El resultado ha sido la anulación del único periódico opositor del Gobierno y del ejército.

Este clima de tensión se nota en otros ámbitos con el reciente resurgimiento de los «escuadrones de la muerte». La actividad de estos grupos ha sido especialmente intensa durante estos meses de conversaciones entre la guerrilla y el ejército, con campañas de prensa para intoxicar y crear desconcierto en la opinión pública, sobre todo en el ejército. Ha habido una gran publicidad pagada en la prensa y televisión, para ame-

drentar, con veladas amenazas de muerte, a los diputados que se distinguieran en las reformas constitucionales para la paz. La ultraderecha mantiene una campaña de presión pública con anuncios pagados en prensa, televisión y radio, y panfletos que se distribuyen por las calles amenazando personalmente, en sus familias y en sus negocios a los que colaboren con organizaciones internacionales a las que se acusa de «comunistas»: las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Refugiados, la Cruz Roja, Médicos sin fronteras, etc. Parece que la tensión dentro de ARENA y la polarización de las distintas corrientes de la derecha aumenta.

También han renacido los secuestros a empresarios, que se han achacado a la ultraderecha y a grupos paramilitares, así como al FMLN, al menos en dos de los casos. Ya en 1986, grupos con militares cometieron secuestros y exigieron grandes sumas de dinero, presentándose como guerrilleros del FMLN. Nunca se aclararon estos secuestros y algunos militares implicados continúan en el ejército. De ahí que la nueva oleada de secuestros se interpreta por algunos analistas como una forma de crear confusión y tensión en la opinión pública ante las negociaciones, por parte de los radicales de ambas formaciones.

Las negociaciones y los impedimentos para la paz

LAS negociaciones se han tenido en el contexto de una fuerte presión nacional e internacional para que se llegara a un acuerdo. Por una parte, miembros del Gobierno, sectores más flexibles del ejército y comandantes del FMLN han anunciado públicamente que la paz estaba cercana y que el acuerdo de alto el fuego era posible. Destacados políticos extranjeros, como el ministro español de Asuntos Exteriores, se han pronunciado en la misma línea. El arzobismo de El Salvador concordaba con estas expectativas, pero anunciaba constantemente que había sectores de la vida nacional que seguían oponiéndose a estos acuerdos de paz y que estaban dispuestos a hacer lo posible por impedirlo.

La situación militar

Las conversaciones están determinadas por tres problemas importantes. Por un lado, el acuerdo de paz lleva consigo la delimitación de un territorio para la guerrilla, el que ésta controla de hecho. Esto choca con la teoría oficial del ejército, que siempre ha negado que existieran zonas liberadas o controladas por el FMLN, y con el rechazo de los sectores más duros que no querían aceptar este armisticio, al ver en él un reconocimiento implícito oficial de la guerrilla. El tema del territorio ha sido desde el comienzo una problemática esencial sin resolver.

En la práctica esto se ha traducido en una intensivación de la guerra: por un lado, el esfuerzo del ejército por reconquistar territorio controlado por el FMLN y así reducir su zona de influencia antes del alto el fuego, y por otro, la política de conservación y de expansión del FMLN, que también aumentó los atentados a objetivos económicos o militares fuera de su zona para demostrar su fuerza y la impotencia del ejército. Hasta ahora se mantiene un empate militar: ningún bando tiene fuerza para acabar con el otro. Esto ocurre desde hace once años.

Esta actividad militar ha ido acompañada en los últimos meses de un mayor potencial de cobertura y de infraestructura tanto para el FMLN como para las fuerzas armadas. La política de tierra quemada practicada por el ejército en la última década llevó a un despoblamiento forzado de la zona controlada por la guerrilla y a un exilio forzado de sus habitantes civiles que se ubicaron en campos de refugiados, mayoritariamente de la Iglesia y de la Cruz Roja, en los países vecinos centroamericanos.

Desde finales de los años ochenta la presión internacional ha propiciado el retorno de muchos de estos refugiados y la repoblación de sus zonas de origen. Esta repoblación fortalece al FMLN. Los repoblados son un semillero de guerrilleros por el rechazo que sienten hacia el ejército después de las masacres, exterminio de aldeas y persecuciones sufridas en el pasado. Por su parte, el Gobierno y el ejército dificultan el crecimiento de estas repoblaciones: crean obstáculos para el aprovisionamiento, dificultades para los visitantes, impedimentos para las comunicaciones con el resto del territorio nacional, etc.

EL otro elemento a tener en cuenta son los Estados Unidos, que han interferido constantemente en las negociaciones. Por ejemplo, con declaraciones del general Powell abriéndose a la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en El Salvador, con declaraciones del embajador sobre los asuntos de la negociación, etc. Esta injerencia directa ha sido criticada duramente por la oposición, por muchas asociaciones cívicas y por la misma Iglesia a través del obispo auxiliar de San Salvador. El intervencionismo americano durante las conversaciones es continuo. Así por ejemplo, anunció que serían entregados al ejército nuevos helicópteros, capaces de operar, a pesar del armamento antiaéreo que tenía la guerrilla, cuando las conversaciones estaban en su apogeo. De la misma forma ha mantenido parte de la ayuda militar, disfrazada como asistencia no militar, a pesar de la oposición de gran parte del Congreso. Esta postura no sólo robustecía al Gobierno frente al FMLN sino también animaba a los sectores más duros de las fuerzas armadas.

De hecho, la población civil es la que sufre este incremento de la violencia. En ambos bandos se cruzan acusaciones contra los respectivos extremistas que no quieren la paz negociada y se aferran a una solución

militar. El derrumbe del bloque del Este hace acariciar de nuevo a militares y consejeros norteamericanos la posibilidad de una derrota militar de los insurrectos.

Estos grupos militaristas subsisten en ambas partes porque hay muchos intereses condicionados a la pervivencia de la guerra, sobre todo por la ingente ayuda militar y económica estadounidense que sufriría recortes al llegar la paz. El caso de Panamá, que todavía espera la ayuda prometida antes de la invasión norteamericana, es aleccionador y perjudica a la paz. Un problema por resolver es el de buscar salida a oficiales del ejército, que tendría que reducirse enormemente en caso de que llegara la paz, y que no tienen aseguradas sus perspectivas profesionales y económicas.

La reforma de la constitución

UN segundo problema que hace difícil la negociación es el actual artículo 248 de la Constitución que prescribe que cualquier reforma constitucional tiene que ser aprobada por una cámara legislativa, y luego ser refrendada por otra posterior con mayoría de dos tercios. La actual constitución data de 1983 —la anterior de 1962 fue suspendida por el golpe de Estado de 1979—, fue el resultado de las fraudulentas elecciones de 1982 y del clima de polarización que se daba en el país, ya en plena guerra.

Esto implica que, cualquier cambio constitucional que facilite la integración de la guerrilla en la política y el final de la guerra, tiene que esperar hasta la próxima legislatura, con el consiguiente aplazamiento de cualquier solución no militar. La guerrilla, por su parte, exige la reforma constitucional de la Constitución. Sobre todo en lo concerniente al sometimiento del ejército al poder civil, y la independencia del poder judicial, muy corrompido en la actualidad, y de la misma cámara respecto al Gobierno, que no están salvaguardadas en la Constitución vigente.

Al acabar la legislatura en marzo de este año se pudo hacer una reforma global de la Constitución, y proponer la eliminación del artículo 248 que es el que bloquea todas las medidas. Sin embargo, la campaña orquestada por la ultraderecha de ARENA y por el ejército bloqueó esa reforma y ha dejado un peso que obstaculiza todas las negociaciones. Ha sido un triunfo de la ultraderecha, que incluso hizo publicidad pagada, en la forma de esquelas mortuorias, contra los diputados que se atrevieran a la modificación de ese artículo constitucional.

La reforma del ejército

El tercer problema, el más difícil, es el del enjuiciamiento de los miembros del ejército culpables de atrocidades y masacres en el pasado.

Esta es una exigencia irrenunciable de la guerrilla. La ultraderecha, por el contrario, intoxica a la opinión pública con el anuncio de que las conversaciones tienen como objetivo el progresivo desmantelamiento del ejército hasta su desaparición.

Este problema, el de la depuración del ejército, el del final de su impunidad fáctica y el de su subordinación a las instancias civiles sigue siendo el que ofrece más dificultades. A esto hay que añadir el de la integración del FMLN que pidió primeramente integrar a parte de sus miembros en el nuevo ejército y posteriormente instaurar mecanismos de control que impidan la prepotencia futura de las fuerzas armadas una vez dejadas las armas. Este es el «nudo gordiano» que ha tenido bloqueadas las negociaciones y que había generado un callejón sin salida.

EL secretario de la ONU ha roto este estancamiento en las conversaciones que se han tenido en Nueva York desde el pasado 16 de septiembre. El acuerdo político ha sido posible por la presión internacional, una mayor flexibilidad de Estados Unidos y de su embajador en las Naciones Unidas respecto a la postura más intransigente del embajador en El Salvador, y por el deseo de Cristiani de aparecer como el pacificador de la nación al término de su mandato. El FMLN siempre ha estado más comprometido con las negociaciones porque es consciente de que la coyuntura internacional no le favorece y porque alargar la guerra no le llevará a la victoria. Aparte de esto, todos son conscientes del cansancio de la población ante una guerra de once años.

El acuerdo establece puntos básicos que responden a las pretensiones del FMLN. Destaca el acuerdo sobre reforma agraria que afecta a los latifundios no cultivados y que concede la tierra a los campesinos que la trabajan desde hace años en la zona de la guerrilla, previa compensación estatal a los propietarios. La creación de una policía nacional, independiente del ejército, en la que participarían salvadoreños de ambos bandos y que tendría como fin controlar a los temidos escuadrones de la muerte e impedir que sigan actuando. Se pone fin así a la corrupta y militarizada policía actual que nunca ha apresado a ningún escuadrón de la muerte.

A esto hay que añadir la creación de una comisión de paz con integrantes de ambos bandos, personalidades civiles y eclesiásticas y el respaldo de la ONU. Con ello se trata de dar garantías a la guerrilla para su reintegración en la vida civil. En cambio se acepta el rechazo por parte del ejército a que los guerrilleros se integren dentro de las fuerzas armadas, se retrasa su reestructuración y disminución al final de la guerra y se negocia para limitar la purga sólo a los casos más clamorosos de violación de los derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad contra las poblaciones civiles.

El problema sigue siendo, sin embargo, el que estos acuerdos no se conviertan en papel mojado, por una parte, y el firmar un acuerdo defini-

tivo de paz, por otra. Este es el sentido de las negociaciones que continúan en octubre. La ultraderecha ya ha reaccionado en contra de los acuerdos y *El Diario de Hoy,* controlado por Carlos Alberto Montaner, periodista bien conocido entre los medios de ultraderecha española, ya ha comenzado una campaña de propaganda que busca recortar el alcance de los acuerdos de Nueva York. Se trata de una batalla política dentro del partido gobernante y sobre todo entre facciones de las mismas fuerzas armadas.

El gran interrogante es si el presidente Cristiani logrará hacer triunfar sus acuerdos y en gran parte eso dependerá de la toma de postura del mayor D'Abuisson al que se achaca la autoría intelectual del asesinato de monseñor Romero y de la organización de los escuadrones de la muerte, y que actualmente se encuentra afectado por un cáncer terminal de garganta y se le dan pocos meses de vida. Hay que tener en cuenta también las tensiones que se dan en la política norteamericana respecto a El Salvador, con posturas diversas entre la Secretaría del Estado, la CIA y la misma embajada en El Salvador.

NUNCA estuvo El Salvador tan cerca de la paz. Sin embargo, ésta depende de un hilo. Hay muchos intereses en favor de la guerra, muchas resistencias a la paz, incluidas algunas fracciones minoritarias del FMLN, muchas esperanzas puestas en una presunta solución militar que hasta ahora se ha demostrado imposible. Mientras tanto la economía está desarticulada en el momento en que se relanza el proyecto de un Mercado Común Centroeuropeo. La conjunción de la sequía, de la ausencia de una política energética por parte del Gobierno y de los sabotajes de la guerrilla, ha llevado consigo el racionamiento energético cotidiano, la reducción de la capacidad productiva del país y el caos de las ciudades afectadas por la carencia de electricidad. En gran parte, El Salvador subsiste por la ayuda norteamericana y el envío de divisas por los emigrantes.

El futuro se presenta preocupante y esperanzado al mismo tiempo. Todo está todavía en el aire. La paz sigue siendo posible pero se dilata en el horizonte de conversaciones que parecen inagotables. Su curso dependerá en buena medida, una vez más, de la presión internacional y muy especialmente de la voluntad estadounidense. La paz es lo más racional y lo más realista. Sin embargo la política, desgraciadamente, tiene mucho de irracional y de ilusorio. En los próximos meses se despejarán los interrogantes. 1991 puede ser el año de la paz para El Salvador, pero también la oportunidad perdida.